

Argentina y la crisis capitalista

*Por: Julio C. Gambina**

I Introducción

A fines del 2001 se hizo evidente la crisis del capitalismo en la Argentina. Las clases dominantes no podían asegurar la reproducción del ciclo del capital y su acumulación de riquezas, ganancias y poder. Cinco años de recesión entre 1998 y 2002 son parte de la manifestación de esa crisis, tal como el cierre de industrias y su pérdida de peso relativo en la composición del PBI local, con la subsiguiente secuela de desempleo y subempleo. Del mismo modo lo es la crisis bancaria¹ procesada entre las normas restrictivas de noviembre de 2001, la pesificación asimétrica, las compensaciones otorgadas con bonos de la deuda pública y los balances nuevamente positivos de los bancos a diciembre de 2003. También lo son la caída de rentabilidad denunciada por las privatizadas de servicios públicos entre el 2001 y el 2002. Y sobre todo la cesación de pagos del Estado ante la imposibilidad de pagar la deuda pública a comienzos del 2002 y las sucesivas renegociaciones, primero con el FMI y los organismos internacionales en septiembre de 2003 y actualmente con los tenedores privados de títulos públicos de la deuda en default.

La crisis capitalista limitaba la dominación del capital y restaba gobernabilidad al régimen político burgués. Las clases subordinadas estaban en conflicto permanente, extendiendo su protesta a todo nivel. La explosión social generada en diciembre de ese año modificó el sentido estructural de la organización social, política y cultural del país. Surgía un nuevo ciclo de lucha de clases, donde ya no existía solamente la iniciativa del capital más concentrado. Empezaba a cerrarse la ofensiva del capital comenzada a mediados de los 70. El ciclo iniciado con terrorismo de Estado para reestructurar regresivamente la economía, el estado y la sociedad empezaba a objetarse con una iniciativa popular que pretendía cerrar un ciclo histórico.

Se abría un nuevo momento y desafío a dos puntas. Por un lado, el bloque de clases dominantes era desafiado a restablecer el orden social y generar condiciones favorables para la acumulación de capitales, y si ello era fuera posible, con consenso mayoritario de la sociedad. Por otro lado, las clases subordinadas eran retadas a resolver la ausencia de alternativa política que caracteriza el cuadro de situación de la Argentina en los últimas tres décadas.

* Profesor Titular concursado de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

¹ En las postrimerías del gobierno de De la Rúa y con Cavallo en el Ministerio de Economía se instaló el “corralito” que era la imposibilidad de disponer de la totalidad de los fondos depositados en el sistema bancario. Estas medidas fueron profundizadas luego de la caída del gobierno por las nuevas autoridades, las que iniciaron un proceso de pesificación de los créditos en una relación de un dólar igual a un peso y a una conversión de cada dólar depositado por un peso con cuarenta centavos, que fue la paridad establecida al comienzo de la devaluación del peso. La devaluación eliminó la convertibilidad que otorgó paridad entre el dólar y el peso por once años. Por las pérdidas derivados de estos cálculos, ahorristas y bancos demandaron al Estado para obtener compensaciones, parcialmente resueltas y que fueron a engrosar el endeudamiento público. Es una deuda regularizada pese al default de la deuda previa con los inversores privados.

Vale recordar que la crisis capitalista de los 70, expresada como caída de la tasa de ganancia y ejercicio de la mayor acumulación de poder popular, motivó una escalada terrorista para disciplinar al movimiento social y encaminar cambios en las relaciones sociales favorable al capital más concentrado. Es un camino recorrido en la transformación de la relación entre los capitalistas y los trabajadores, siendo sus secuelas el desempleo, el desempleo, la informalidad y la precariedad. La caída de ingresos y la pobreza son resultado directo de la impunidad y ofensiva gran empresaria, la que contó con el aporte y complicidad de las burocracias políticas, sindicales y de los personeros de los medios de comunicación.

Pero también se manifiesta en el cambio de función del Estado, donde las privatizaciones solo son la cara más visible de un sector público puesto al servicio de los intereses y necesidad es del capital hegemónico. En ese sentido actuó también la subordinación al ciclo transnacional del capital, donde el endeudamiento externo y la apertura de la economía fueron convergentes con el acrecentamiento de la brecha de ingresos y riquezas entre los más ricos y el conjunto de la sociedad, profundizando la desigualdad y condenando en treinta años a un balance de pobreza que afecta a más de la mitad de la población. Es un proceso transitado más allá del régimen dictatorial entre 1976 y 1983. Las sucesivas administraciones constitucionales transitaron esencialmente el mismo andarivel.

Desde la crisis manifiesta en diciembre de 2001, la lucha de clases pone en evidencia al movimiento popular como actor político que intenta transformar las relaciones sociales hegemónicas. Se desordena el ciclo político y de acumulación de riqueza y de poder. La consigna popular reclama “que se vayan todos”, al tiempo que alienta nuevas formas de organización, entre las que se destacan el movimiento de asambleas, los piquetes, las empresas recuperadas. Se abren expectativas con el aliento a formas de organización económica no lucrativas, cooperativas y emprendimientos asociativos para la reproducción de la vida cotidiana en pequeños territorios.

Los trabajadores, ocupados y desocupados, y otros sectores medios empobrecidos son los protagonistas del nuevo tiempo. Es una realidad que se desarrolla luego de la derrota impuesta por el genocidio dictatorial y la maceración cultural de años de posibilismo y domesticación social transitados bajo regímenes constitucionales. Debemos adicionar a lo comentado la crisis de la izquierda local, agravada con la afectación del imaginario socialista luego de la caída del este de Europa en los 90.

II Dos iniciativas políticas contrapuestas

El desorden a que aludimos desató un conjunto de iniciativas que se procesaron intensamente entre diciembre de 2001 y la actualidad. La continuidad de la fragmentación popular y la ausencia de una alternativa política habilitaron la progresiva recomposición política resultante del proceso electoral de 2003 y el restablecimiento de un “programa” expresado en el discurso de asunción presidencial² para “reconstruir el capitalismo nacional”. Puede objetarse ese propósito desde la ausencia de un sujeto burgués nacional, o de una alianza social con hegemonía burguesa local para encarar el programa. Pero no debe subestimarse la misión gubernamental para otorgar función al capitalismo realmente existente en el país, es decir, aquel que determina la dominación desde un bloque de clases que agrupa al poder económico.

² Discurso de Néstor Kirchner el 25/05/03.

Aludimos en primer lugar a los acreedores externos y sus vinculaciones con los organismos financieros internacionales y el G7, grupo de los países capitalistas desarrollados que pretenden ordenar el sistema mundial en acuerdo con los intereses de los capitales más concentrados y las potencias imperialistas. En segundo lugar mencionamos a los principales beneficiarios de la devaluación, el sector productor y exportador de bienes, petróleo y soja, entre otros, los que concentran lo principal del crecimiento experimentado durante el 2003. En tercer lugar aquel que constituían el núcleo beneficiario de la convertibilidad por once años: las privatizadas de servicios públicos y la banca transnacional y los negocios financieros a ellos vinculados.

Todos estos sectores han ido mejorando su situación relativa respecto de la crisis de fines del 2001. Si bien subsiste la contradicción entre aquellos que bregaban por la dolarización (acreedores de la deuda pública; empresas privatizadas y bancos transnacionales) y aquellos que demandaban la devaluación (industriales y exportadores), unos y otros puján por reacomodarse en el nuevo marco de funcionamiento del capitalismo local. Cada uno reivindica ventajas competitivas para la mejora de la rentabilidad. Pretendiendo más cobros los acreedores; menos retenciones los exportadores y si es posible la eliminación de las mismas; compensaciones los bancos; y ajustes de tarifas las privatizadas. Cada quién, parcial y progresivamente va obteniendo acuerdos o promesas de los administradores del Estado en el sentido de sus demandas.

La satisfacción de las demandas del poder se manifiesta como su contrario en el seno de las clases subordinadas. No existe un sólo indicador social que haya mejorado esencialmente desde la crisis recesiva del 98 al 2001, pese a que la economía argentina del 2003 termina con un crecimiento del 8,7% de su PBI³, que no se socializa y, que entre otros aspectos, no modifica sustancialmente la crisis del empleo y los ingresos de los trabajadores y de aquellos sectores que vinculan su nivel de vida a la capacidad de compra del salario. Según el INDEC, el pico más alto de desempleo se registró en mayo de 2002, con un registro del 21,5% sobre la PEA, mientras que oficialmente se informa que a comienzos del 2004, baja hasta el 14,5% contribuyendo en la disminución el impacto derivado de los subsidios otorgados a Jefes y Jefas de hogar desempleados⁴. El propio INDEC señala que sin contar esos subsidios, el desempleo alcanza el 19,7%, con lo que se está muy lejos de haber superado el problema laboral y de ingresos de millones de trabajadores afectados.

En octubre de 2001, según datos del INDEC, el porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza se ubicaba en el 38,3%, mientras que en mayo de 2003, y luego de la devaluación, dicho porcentaje se elevaba al 54,7%, hecho que evidencia las tendencias reales de la evolución económica en Argentina. El dato reciente señala que para los 28 aglomerados urbanos más importantes el guarismo se reduce al 47,8% y la indigencia

³ Las principales causas del crecimiento se vinculan a la expansión de las exportaciones, principalmente de petróleo y soja con sus respectivos derivados. Exportaciones que se concentran en muy pocas empresas y que generan escaso empleo. El crecimiento es también resultado de la utilización de la capacidad ociosa industrial, no siempre generadora de empleo. El empleo resultante es en general en condiciones precarias. El crecimiento 2003 no recupera la caída del 2002 y está muy lejos de recuperar los niveles de la última expansión a mediados de 1998.

⁴ El programa para Jefes y Jefas de Hogar alcanza a una población cercana a los dos millones de personas, con un subsidio mensual de \$150, equivalente a menos de 50 dólares según la cotización a fines de marzo de 2004. La línea de la pobreza está establecida en \$730 mensuales aproximadamente.

baja del 27% al 20,5%. Aún con la baja, el indicador sigue destacando un elevado nivel de indigencia y pobreza, especialmente considerando que no se toma en cuenta a la mayoría de los centros urbanos de menor población y a todos aquellos que habitan la zona rural, con lo cual el porcentaje nacional de pobreza e indigencia puede incrementarse considerablemente. Los salarios han recorrido el mismo camino, dado que durante el período de la devaluación se han mantenido congelados en términos nominales, salvo algunas correcciones en un pequeño porcentaje, asentado en el sector privado, pero en términos de poder adquisitivo los altos niveles de inflación, vinculados a la exacerbación de las ganancias de los sectores exportadores de productos de necesidad básica, han generado su caída. La proyección inflacionaria para el 2004 hace prever una profundización en el deterioro de la capacidad de compra de los sectores de ingresos fijos y/o bajos.

Todo ello ha provocado la extensión del empleo no regularizado y el deterioro de su calidad. Así, lejos de cambiar los beneficiarios de la política económica del gobierno, hasta el momento, la orientación principal de ella ha restablecido las condiciones de los negocios del bloque de clases dominantes, y ha profundizado las tendencias de explotación y pauperización, claro que acompañadas de un discurso que proclama la distribución del ingreso y que aún no se evidencia en la práctica, salvo aquellas situaciones derivadas de la recuperación económica que evidencian los datos del 2003. Es cierto que la recuperación ha puesto en funcionamiento la capacidad ociosa de la industria y que se han generado puestos de trabajo e ingresos, claro que todos admiten que gran parte de ellos son en condiciones precarias y por debajo de la línea de pobreza. Afirmando lo manifestado en materia de distribución del ingreso, puede servir la comparación entre lo destinado al plan de jefes y jefas que representó $\frac{1}{4}$ de lo destinado a cancelar deuda externa, pese al default. Desde la devaluación hasta ahora es poco lo que ha cambiado desde el punto de vista de los perjudicados, a la vez que se han asegurado los intereses del poder económico local y transnacional en una fase de recomposición política aún en proceso.

La continuidad de la iniciativa popular no se expresa como logros en la distribución del ingreso y de la riqueza. Lo hace en la perspectiva de una experiencia de organización alternativa para la reproducción de la vida cotidiana de una multiplicidad de población que desarrolla fuertes tensiones con la hegemonía del poder del Estado y la sociedad. Aludimos a la experiencia de los trabajadores en todas sus formas, tanto de aquellos que se encuentran en situación regular y luchan por su salario y mejores condiciones de empleo y de vida, como aquellos que experimentan el fenómeno de las empresas recuperadas, de las cooperativas y de los trabajadores desocupados devenido en movimiento piquetero y que se han transformado en un actor político visible de oposición.

Estos últimos, son por un lado receptores de subsidios del Estado y como tales proclives al clientelismo. De otro lado, con esos recursos intentan mecanismos de autonomía del Estado en la organización de emprendimientos colectivos y asociativos no lucrativos para satisfacer necesidades sociales básicas. Esa es una tensión permanente con el Estado y que se procesa en manifestaciones callejeras para evitar la disminución de los planes y procurar la universalización de un beneficio que solo alcanza a un tercio de los necesitados. Esa movilización ha generado una tensión con una parte de la sociedad, derivado de los efectos que sobre ellos acarrea el corte de rutas o calles. Es una tensión que debilita la constitución de bloque popular, ya que genera la contradicción entre

distintos sectores populares. Es cierto que el fenómeno ha sido exacerbado por los medios de comunicación, generado un clima adverso entre el sentido común generalizado entre los sectores medios y el movimiento piquetero.

Autonomía de las organizaciones populares y subsidios estatales son así parte de un desarrollo dialéctico donde se juega la potencialidad de la construcción de nuevas relaciones sociales entre los trabajadores, y entre estos y el Estado como expresión de las relaciones capitalistas imperantes. Mientras, la confrontación entre el derecho a la circulación y a la demanda de derechos sociales desafía al movimiento piquetero para reconstituir su carácter de movimiento de masas con apoyo solidario de otros sectores sociales también afectado por el modelo de acumulación de capitales.

Pero la acumulación de poder popular no solo se expresa en las reivindicaciones económicas, sino que también se pone de manifiesto en un conjunto de reivindicaciones democráticas, tales como las demandas por los derechos humanos. En este sentido es notoria la respuesta gubernamental en una serie de recambios parciales en materia de legislación y justicia. En el primero de los campos se anota la anulación de las leyes de impunidad: el punto final y la obediencia debida. En el segundo de los aspectos se registra el proceso aún inconcluso de renovación de la Corte Suprema de Justicia. Es imposible pensar en modificaciones de este carácter sin los acontecimientos de diciembre de 2001. La pueblada condicionó el tipo de gobierno resultante, y su discurso y práctica de gobierno así lo expresa. Por ello, el movimiento apunta ahora sobre la anulación de los indultos a los genocidas y la transformación de la Justicia en sentido integral y la renovación total de los magistrados de la Corte Suprema. “La decisión de desalojar a la Armada de la Esma⁵, uno de los símbolos del terror dictatorial, es una reivindicación de la memoria de lucha de nuestro pueblo y constituye un hecho valioso para todos los hombres y mujeres que queremos justicia” señala el documento suscripto por las organizaciones convocantes al repudio de un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976.

Son todos elementos de tensión entre las clases dominantes y subalternas. Es una lucha de clases, donde el gobierno, administrador del Estado, intenta organizar el funcionamiento del capitalismo local. Por un lado reconoce el clima social, político e ideológico imperante y desde allí construye consenso social en un proceso de restablecimiento del ciclo de los negocios del capital.

III El accionar gubernamental y las demandas del poder económico

El escaso consenso electoral inicial del actual gobierno motiva un conjunto de iniciativas políticas del poder ejecutivo que parten de la nueva situación de la lucha de clases en la Argentina. Eso nos hace pensar en que lo nuevo es la emergencia del movimiento popular para condicionar una forma de restablecimiento de un capitalismo “normal” o “serio”, tal como reiteradamente manifiesta el Presidente Néstor Kirchner.

Convengamos, que un capitalismo serio o normal es aquel que asegura la reproducción ampliada del capital con consenso de la mayoría de la sociedad y la capacidad de disciplinar a la minoría insatisfecha o resistente. Todo lo dicho es en polémica con aquellos que ponen como dato relevante de la realidad política la iniciativa presidencial.

⁵ Disposición del Poder Ejecutivo materializada el 24/03/04.

Sin desmerecer ese análisis y aceptando que no es lo mismo Kirchner que Menem o De la Rúa, nuestra insistencia alude a las nuevas búsquedas surgidas de la pueblada y que pone límites al discurso hegemónico de los últimos años. Esa es la razón esencial para diferenciar la administración Kirchner con las inmediatas anteriores.

Es una hipótesis a seguir profundizando, y sin embargo existen elementos que nos indican su validez. Si se considera el impacto social de la forma de negociación del gobierno con los acreedores pueden sacarse algunas conclusiones interesantes. Existen claras referencias del rechazo del pueblo argentino al FMI y al pago de la deuda externa. En noviembre pasado se realizó la consulta popular contra el ALCA donde también se interrogó a 2.300.000 personas sobre la militarización y el pago de la deuda externa. Las respuestas fueron contundentes y el 98% se pronunció contra el ingreso de tropas de EEUU al país y la posibilidad de realizar ejercicios militares compartidos. El 96% demandó el retiro del gobierno de las negociaciones por el ALCA y el 88% se manifestó contra el pago de la deuda. Es una muestra muy representativa, especialmente si se considera que se trató de una iniciativa sin apoyo oficial y organizada en forma militante por movimientos sociales y políticos con escasa estructura y recursos financieros.

Pese a ello, existen diversos estudios realizados por consultoras privadas que abarcan unos cientos de casos y que aluden al apoyo a las formas de negociación del gobierno con los acreedores. Eso se debe a que la forma del mensaje gubernamental incluye expresiones que resaltan las contradicciones entre ciertas demandas de los acreedores y las propuestas del gobierno. Sin embargo, pueden afirmarse que Argentina ha cancelado deuda como nunca con los Organismos Financieros Internacionales. Solo entre 2002 y 2003 los saldos negativos netos alcanzaron los 7.000 millones dólares.

Es evidente que aparece como contradictorio y lo que ocurre es que la percepción popular es que el gobierno está enfrentando al FMI, aunque en la práctica se cancelen los vencimientos. Luego de muchos discursos que amenazaban con la posibilidad de no pagar un vencimiento de 3.100 millones de dólares al FMI el 9/03/04, finalmente el gobierno canceló resignando el 20% de las reservas internacionales. Lo que queremos señalar es que hoy no se puede pagar la deuda con un discurso de subordinación al poder global. Esa es la razón por la que se formula un discurso de confrontación y al mismo tiempo se establece una cuota muy elevada para cancelar créditos con los organismos internacionales.

A poco más de dos años de la pueblada, la iniciativa política es un camino de ida y de vuelta. Es cierto que el poder popular confronta con las clases dominantes y sus redes de poder cultural, económico, político y social; pero también lo hace con la propia fragmentación y desarticulación de un espacio que sigue buscando formas de expresar la nueva emergencia política de los trabajadores y otros sectores populares afectados por la forma de funcionamiento del capitalismo en la Argentina. La perspectiva de “reconstruir el capitalismo nacional” es ajena a quienes sostenemos una estrategia de solución de las necesidades socio económicas más extendidas y que no pueden resolverse desde la lógica de explotación capitalista, aún de carácter nacional, máxime en tiempos de globalización capitalista y crudamente expresada en la dependencia del capitalismo local a las demandas de los acreedores externos y las transnacionales hegemónicas en el sistema financiero, el comercio exterior y la prestación de los servicios públicos.

No obstante haberse producido modificaciones importantes en la política de gobierno, existen una serie de cuestiones, de gran importancia, sobre las que no se han producido modificaciones de fondo y que marca ciertamente el carácter del nuevo gobierno hasta el momento. Es necesario profundizar al respecto, ya que el primer desafío es la crítica del capitalismo realmente existente, que es una relación social de explotación y por ello hace falta considerar dialécticamente las partes que lo configuran, sus beneficiarios y perjudicados, sus intereses y motivaciones, tanto como sus contradicciones y luchas. Entre los aspectos salientes para identificar el rumbo del capitalismo en la Argentina se puede acudir a aquellos aspectos esenciales para el núcleo central de las clases dominantes en el capitalismo en la Argentina, tal como la demanda de cobro de los acreedores de la deuda pública, el incremento de las tarifas de servicios públicos reclamadas por las privatizadas y las compensaciones solicitadas por la banca.

Detengámonos en el tema del endeudamiento. La deuda externa fue declarada en default en enero de 2002 y desde entonces hubo presiones de la comunidad financiera internacional⁶, para que Argentina se reinserte en el mercado financiero mundial, mediante el pago de la deuda. Eso motivó multiplicidad de negociaciones, especialmente con el FMI, que culminaron con el acuerdo, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, en enero de 2003, y en septiembre del mismo año, ya en la presidencia de Néstor Kirchner. En ambas ocasiones el Ministro de Economía fue Roberto Lavagna. En esta última oportunidad se llega a un acuerdo estructural, por un período de tres años, cuya primera revisión fue aprobada por el FMI a comienzos de 2004, con la abstención de varios países representados en el Directorio del organismo multilateral. La segunda revisión fue aprobada por unanimidad a fines de marzo tras el pago de Argentina de un vencimiento de 3.100 millones de dólares y una serie de demandas para asegurar la reestructuración de la deuda en default. El tema es importante ya que se especuló internacionalmente con la cesación de pagos al FMI ante ese vencimiento. Argentina resignó el 20% de sus reservas internacionales para continuar las negociaciones y no denunciar el acuerdo. En la apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento, el 1/03/04 el presidente Kirchner señala sobre su administración que “no era el gobierno del default”, expresando clara voluntad de pago.

En dicho acuerdo⁷ se establece un fuerte ajuste fiscal del 3% de superávit primario para el 2004 y un conjunto de reformas estructurales que expresan los intereses de las clases dominantes en Argentina. Durante el año 2004 se discutirá la pauta de superávit necesario para el 2005 y 2006⁸. El gobierno ha reafirmado el privilegio de pago a los organismos financieros internacionales. Así lo muestran las cancelaciones realizadas desde el propio año del default y hasta nuestros días. Si esos pagos tienen impacto fiscal negativo, el problema se acrecentará luego de la reestructuración de la deuda en default, aunque el gobierno sostiene la noción de “bolsillo único” para la cancelación de vencimientos a los acreedores. El mensaje gubernamental es que los acreedores recibirán pagos con la condición de “no comprometer el crecimiento”. Argentina ha hecho una propuesta a los titulares de bonos en cesación de pagos, enunciada en septiembre de 2003, de una quita del 75% del monto de capital adeudado.

Es conveniente apuntar que esa deuda en títulos impagos alcanza los 82.000 millones de dólares y que registra unos 18.000 millones de dólares de intereses no pagados desde la

⁶ G7+Organismos Financieros Internacionales+Bancos Transnacionales.

⁷ Sitio en Internet del Ministerio de Economía de la República Argentina, www.mecon.gov.ar

⁸ Las revisiones del Acuerdo son trimestrales y en cada oportunidad se discute el avance de lo suscripto.

cesación de pagos⁹. De ese total, el 38% está en manos de argentinos y la mitad de ello en los fondos previsionales acumulados por los aportantes al sistema privado de jubilaciones y pensiones que administran las AFJP. Con lo cual, la quita afecta, entre otros, al ahorro de los trabajadores y privilegia a la comunidad financiera internacional, puesto que a los organismos financieros internacionales se les reconoce y renueva el 100% de la deuda.

La deuda pública es un condicionante presente y futuro que hipoteca la posibilidad de resolver las demandas de los sectores sociales subordinados. Las condicionalidades apuntan al cobro, aún parcial del capital o los intereses, pero sobretodo a inducir un conjunto de propuestas de política económica que favorezcan los intereses del capital hegemónico, que hoy puede concentrarse en la categoría del libre cambio. A ello se alude con la apertura económica y el libre movimiento de los capitales, tanto como con las privatizaciones, las desregulaciones y el proceso de reformas estatales para sostener la acumulación privada de capitales.

Pensar alternativamente es resistir ese fenómeno y por ello aparece en primer lugar la consigna del no pago de la deuda, aunque ella requiera ser adecuadamente estudiada, pues no se trata de afectar intereses populares, de tenedores de títulos por imperio de los propios mecanismos económicos del capitalismo, tales como los fondos previsionales generados por los aportes de los trabajadores, o los bonos en manos de estatales, jubilados o proveedores, recibidos para cancelar deuda del Estado. Se trata de negar el pago e investigar a fondo, al tiempo que se genera un movimiento conciente de la necesidad de confrontar con la comunidad financiera internacional y sus vínculos locales, concientes de los efectos sociales derivados del no pago y las presiones políticas e ideológicas. Retirar a la Argentina del FMI implica la búsqueda de alianzas en la región y más allá, con la aspiración de alentar un movimiento global por la anulación de la deuda, que contacte con el movimiento de resistencia mundial que se expresa en múltiples foros y reuniones, tal como el Foro Social Mundial.

En definitiva, Argentina debe denunciar lo firmado con el FMI, desconocer el acuerdo con la comunidad financiera internacional y plantear una reestructuración de la deuda externa que habilite la devolución de los fondos aportados por los trabajadores a las AFJP, pero suspendiendo a la vez el pago a los organismos financieros internacionales y dirigiendo la política económica hacia los sectores populares como beneficiarios fundamentales. Una estrategia de este tipo debe estar necesariamente articulada con acuerdos regionales de acción conjunta, que permitan avanzar concretamente y responsabilizar al FMI, al Banco Mundial y a otras instituciones financieras internacionales intervinientes, por la crisis económica y social de la región. Es obvio decir que esa intervención nunca pudo ser posible sin la complicidad de socios locales.

Un comentario adicional y que vale la pena mencionar es que la Argentina ha retomado la senda del crecimiento luego de cinco años de recesión que culminaron con una espectacular caída durante el 2002. Es un crecimiento que no contribuyó a una distribución progresiva, pese a algunos mínimos recursos destinados a paliar la situación de una parte de los más empobrecidos. Lo destacable es que el crecimiento fue favorecido, entre otros factores, al no pago del total de las obligaciones externas del Estado y a un crecimiento del saldo favorable de la balanza de pagos asentado en las

⁹ Datos obtenidos del sitio en Internet del Ministerio de Economía.

exportaciones de petróleo y soja, dos sectores altamente monopolizados y en manos del capital externo. Pero insistamos, el no pago parcial permitió la utilización del excedente fiscal para atender problemas locales.

El tema de la deuda externa es importante, ya que si en el 2000 y 2001 la Argentina remitió al exterior en concepto de intereses de la Deuda Externa un promedio anual de 12.000 millones de dólares, en el 2002 y 2003 ese monto se redujo a 4.500 millones de dólares, facilitando así la reasignación de fondos disponibles. Queda claro que la perspectiva de no pago, o de disminuir las remesas de pagos a los acreedores externos constituye la posibilidad de la recuperación económica local. Al mismo tiempo es aleccionador que ninguna catástrofe sobre el sistema global ha sido desatada. Es más, ya se escuchan voces a favor de la quita del 75%, y en el mismo sentido, el Nobel de Economía y Ex Banco Mundial, Adolfo Stiglitz recomienda que la Argentina desoiga al FMI.

No resulta menor considerar brevemente el tema de las tarifas y las compensaciones a los bancos. La presión por aumentos de tarifas es de gran magnitud y constante desde la devaluación. Han sido públicas las presiones de empresas y gobiernos extranjeros. A fin de enero viajó de Kirchner a España, para negociar, entre otros, este punto. El gobierno sostuvo la posición de reclamar inversiones y en ese marco discutir la rentabilidad de las empresas. El tema de las privatizaciones debe investigarse estructuralmente y no restringir la atención sólo al tema de las tarifas, con el objetivo de recuperar los servicios públicos para el manejo de la sociedad argentina. El correo argentino constituye un caso paradigmático de la política gubernamental, ya que habiendo revocado su concesión al grupo Macri a fines del 2003, se dispone a su reprivatización, aún cuando en la mayoría de los países del mundo los correos son administrados por los Estados. Ello demuestra que en el ámbito gubernamental no está en debate la privatización de empresas públicas como forma social de abastecimiento, control, y generación de ganancias. Es cierto que en el tema del Espacio radioeléctrico la denuncia de la privatización significó la recuperación de la prestación del servicio a manos estatales. Una propuesta alternativa debería plantear un mecanismo de recuperación y administración con participación popular, de los trabajadores y de los usuarios, para que sea la propia comunidad con control e intervención estatal la que administre estas empresas.

Desde la devaluación asimétrica de los depósitos y créditos, los bancos con actividad en nuestro país vienen exigiendo resarcimiento por las “perdidas ocasionadas”, que afectaron el funcionamiento del sistema bancario. Parte de la crisis ha sido resuelta con pagos del gobierno con bonos de la deuda externa pública, que paga el conjunto de la sociedad argentina. La crisis bancaria es parte de la crisis del conjunto de la sociedad y junto a las demandas del sistema financiero es necesario interrogarse sobre la resolución del conjunto de los problemas sociales, tales como los derivados de la pobreza, el empleo y la distribución de ingresos y riqueza. La banca ha recibido satisfacción a sus demandas por el tema de la asimetría post devaluación y por las modificaciones al CER¹⁰. Ahora demandan resarcimientos por los amparos judiciales para devolver los depósitos dolarizados. Es una discusión que sostienen los bancos y el gobierno. Es la oportunidad para el recuperar el sistema financiero para un proyecto alternativo sustentado en la banca de fomento y sin fines de lucro. Es el camino que han tomado la

¹⁰ CER, Coeficiente de Estabilización de Referencia, es un mecanismo de actualización utilizado luego de la devaluación.

mayoría de los depositantes del sistema financiero y que legitima una posición a favor de la banca oficial y cooperativa en detrimento de la transnacionalización del sistema financiero.

En materia de Política Exterior se han generado algunas expectativas, especialmente por algunas señales de reorientación de las alianzas internacionales. De la subordinación estrecha a la política exterior de EEUU, sus objetivos de militarización, guerra y libre cambio, este último expresado en el ALCA, Argentina ha reorientado sus vínculos externos con un mayor nivel de complejidad y pluralidad, sin eliminar por cierto sus estrechos lazos con la hegemonía hemisférica y global detentada desde EEUU. La presencia en el país de los jefes de gobierno de Cuba, Venezuela y Brasil, en mayo de 2003, generaron expectativas y planteó un debate en América Latina sobre un nuevo eje de articulación política en la región y con capacidad de imponerse frente a la ofensiva estadounidense en la década del '90 y a comienzos del siglo XXI. La presencia de estos líderes latinoamericanos generó un nuevo clima, situación que se verificó en varios encuentros durante 2003 donde Argentina hizo causa común con otros países de la región para contrarrestar las posiciones más favorables al libre comercio impulsadas por EE.UU., tanto en las negociaciones de la OMC en Cancún y del ALCA en Miami. Hay que señalar que la cumbre extraordinaria de las Américas de enero en Monterrey, México, implica un intento de retomar la iniciativa de Washington en la región. Ese intento volvió a expresarse a comienzos de marzo en Buenos Aires para destrabar las negociaciones por el ALCA. Ambas reuniones fracasaron, merced a las contradicciones entre EEUU y sus amigos en el continente y las posiciones sustentadas por el MERCOSUR en su nuevo clima político, pero también por la presencia cada vez más extendida de un movimiento popular de rechazo al libre cambio sustentado por EEUU y las clases dominantes locales. Insistamos en remarcar la importancia de la existencia de sujetos que levanten un programa alternativo, que partiendo del No al ALCA sostienen un movimiento antiimperialista y constituyen sujetos sociales y políticos para pensar la construcción de una nueva sociedad global. No se trata de otro proyecto nacional, sino de un proyecto de otra sociedad, anti capitalista, socialista.

Un cambio importante de la posición en política exterior es el tratamiento que el actual gobierno otorga a Cuba. También, puede mencionarse un involucramiento diferenciado en la crisis de la región, tal como la intervención activa en la crisis boliviana, que incluye contactos con líderes del movimiento popular. Del mismo modo actúa el contrapunto con las posiciones ideológicas y políticas del actual gobierno de Uruguay. Puede leerse en ese sentido también el enunciado de políticas de acercamiento con el gobierno de Venezuela y un conjunto de señales para actuar conjuntamente con Brasil.

En el caso del ALCA, proyecto estratégico de EEUU y de las corporaciones transnacionales de origen estadounidense que actúan en la región, junto a los intereses de los capitales locales a ellos asociados, no se han producido cambios esenciales y los principales funcionarios sostienen las negociaciones, al tiempo que se ha generado un acercamiento político con Brasil para sustentar una política de negociación desde la integración regional. Lo problemático del tema es que la posición de ALCA lighth asumida por el MERCOSUR pasa a ser la forma de inserción de ese bloque en la estrategia de anexión implícita en el ALCA. No se ha tomado posición, tampoco, sobre la propuesta de Venezuela sobre la necesidad de posponer la aplicación del ALCA hasta el 2010 y realizar plebiscitos en todo el continente.

IV Asignatura pendiente

Lo comentado en materia de deuda, tarifas, demandas de los bancos e inserción subordinada en el mercado global, en tanto asuntos esenciales de la estrategia de las clases dominantes que actúan en la Argentina, motivan consignas y movimientos de rechazo en el movimiento popular. El no a las demandas de la dominación constituyen la base de constitución de sujetos necesarios para el aliento de políticas alternativas. Es un fenómeno que viene experimentando un proceso de organización y construcción de subjetividad que aún no ha podido expresarse como alternativa política integral. Por eso, es importante analizar que la crisis política en nuestro país no es exclusiva del bloque dominante y su sistema de gobierno y representación, sino que al existir un cambio histórico cualitativo con el protagonismo popular expresado en las jornadas de diciembre del 2001, también están en crisis los propios actores protagonistas de las múltiples resistencias que desembocaron en la pueblada y el proceso posterior.

Este hecho que suena paradójico, ya que podría entenderse que los que fueron las expresiones mas importantes de la resistencia no debieran estar en cuestión, no se entiende sin entrar a evaluar las propias prácticas políticas, donde junto a lo nuevo, también se expresan visiones sectarias, hegemónicas, que contrapesan los objetivos de superación de la realidad fragmentada del movimiento popular. Superar esa fragmentación es el desafío para poder constituir en un proceso dado, un verdadero bloque popular que dispute la construcción de otro país posible, en el marco de la lucha por otro mundo posible que hoy se sostiene en el Foro Social Mundial y en otros ámbitos. La experiencia de la reciente consulta popular contra el ALCA, la deuda externa y la militarización es una muestra de caminos autónomos de acción y de no quedar a la espera de ninguno de los poderes del estado para intervenir en temas estratégicos para nuestra sociedad.

Argentina sigue generando expectativas por su potencialidad en la perspectiva de objetar el sentido común que instaló la corriente principal de pensamiento en los últimos años en escala global. Sin embargo, ello no termina de materializarse, pues para ese fin se requiere resolver una asignatura pendiente en la construcción de una alternativa política, social y cultural que defino socialista.

Al objetivo de reconstrucción capitalista hoy explicitado por el gobierno le falta su contrario, que sea sostenido por un movimiento de sujetos concientes y que hoy continúa la búsqueda en un marco de fragmentación. El proyecto del gobierno es débil en expresar el bloque social y político que lo sustenta. Las clases dominantes presionan para apropiarse del planteo sustantivo por recrear el capitalismo. Las clases explotadas y subordinadas no terminan de formular su proyecto, que no puede pasar por reconstruir una sociedad de explotación. Es un objetivo a definir en la práctica cotidiana y junto a otros pueblos.

Buenos Aires, 24/03/04